

Ciudadano:  
**Dr. ASDRÚBAL QUINTERO.**  
**Procurador del Estado Zulia.**  
Su Despacho.-

***Honorable Procurador.***

Luego de saludarle, la presente tiene por objeto enviarle dictamen elaborado por esta Consultoría Jurídica, con relación a la actuación de la Procuraduría del Estado Zulia en los procesos contenciosos administrativos, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Procuraduría del Estado Zulia, lo hago en los términos siguientes:

En ese sentido, analizaremos brevemente, la posición del Procurador como representante del Estado en juicio, las leyes que contemplan su intervención en el proceso y los actos que en su condición de defensor de los intereses del Estado puede realizar dentro del mismo.

La Procuraduría del Estado Zulia, como órgano, es la encargada de ejercer la defensa y representación del Estado Zulia, como persona jurídica sujeta a relaciones de derecho y obligaciones de carácter patrimonial. Así se desprende de lo establecido en el artículo 97 de la Constitución del Estado Zulia, que dispone:

**«Artículo 97. Son atribuciones del Procurador:**

1º.- Representar y defender judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado, pudiendo

constituir, mediante autorización del Gobernador, mandatarios especiales para juicios que debieren ventilarse fuera del Estado.

(Omissis)

7°. Las demás atribuciones que le señalen las Leyes.

De igual forma, el artículo 1º de la Ley de la Procuraduría del Estado Zulia, establece de manera categórica que entre otras atribuciones **«corresponde a la Procuraduría del Estado Zulia, representar y defender judicial y extrajudicialmente, conforme a las instrucciones del Ejecutivo del Estado Zulia, los intereses de dicho Estado relacionados con bienes y derechos de la Hacienda Pública Estatal»**. Asimismo, **<<Representar y defender al Estado Zulia, conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Estatal, en los juicios que proponga el Estado Zulia o que se propongan en su contra, o que se susciten entre personas jurídicas de carácter público por otras cuestiones atinentes a los actos públicos nacionales, municipales, del Estado Zulia y de otros Estados, y en los cuales tenga interés legítimo, directos o indirectos el Estado Zulia>>**. Igualmente, **<<Representar y defender al Estado Zulia, conforme a las instrucciones que le comunique el Ejecutivo Estada, en los juicios que proponga el Estado Zulia o que se propongan en su contra, o que se susciten entre personas públicas o privadas por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación, cumplimiento, responsabilidad y cualesquiera otras cuestiones contenciosas o de jurisdicción voluntaria, atinentes a concesiones o contratos**

**que celebre el Ejecutivo Estadal, o atinentes a negocios o hechos jurídicos que implique una obligación de dar, hacer o no hacer una prestación o acto determinado y en los cuales tenga interés legítimo, directo o indirecto el Estado Zulia>>.\_También, <<Representar y defender judicial y extrajudicialmente, conforme a las instrucciones del Ejecutivo Estadal, los derechos e intereses del Estado Zulia relacionados con ingresos públicos estadales>>**

De estas disposiciones se evidencia con claridad que la Procuraduría del Estado Zulia, cumple la función de defensora judicial y extrajudicial del Estado Zulia. De allí que pueda sostenerse que la función fundamental y natural de la Procuraduría del Estado Zulia, es la de tutelar los intereses del Estado mediante la representación judicial y extrajudicial y la defensa de sus derechos bienes e intereses patrimoniales. Función esta que le corresponde de forma exclusiva sin que pueda ser ejercida por cualquier otro órgano o funcionario del Estado salvo previa y expresa sustitución otorgada por el Gobernador del Estado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 97, numeral 2º de la Constitución del Estado Zulia.

Resulta así obligatorio para la Procuraduría asumir la representación del Estado en los juicios que se intenten en su contra, debiendo acatar las instrucciones emanadas del Ejecutivo del Estado Zulia. En todos los demás casos, cuando las partes involucradas en juicio sean ajenas al ámbito del Poder Ejecutivo Estadal, como es el caso de las Empresas del Estado, Fundaciones de Estado, la participación del Estado en juicio no será obligatoria sino facultativa cuando a su criterio los litigios intentados contra los referidos entes puedan poner en peligro o

afecten en cierta forma los derechos, bienes e intereses patrimoniales del Estado.

En ejercicio de esta función natural (Art. 97 de la Constitución del estado Zulia) y a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la Ley, la Procuraduría del Estado Zulia, está legitimada para ejercer la representación judicial de los intereses del Estado bien como sujeto pasivo o como sujeto activo. Así, corresponde a la Procuraduría la representación en juicio del Estado en aquellas demandas ejercidas contra la misma, en las controversias que se susciten entre esta y personas públicas o privadas con motivo de la nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de los contratos que suscriban los órganos del Poder Publico Estatal. También está legitimada la Procuraduría para representar y defender al Estado en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Estatal.

En una posición activa, corresponde a la Procuraduría demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Publico Nacional, Estatal y Municipal bien por razones de inconstitucionalidad como de ilegalidad. (numeral 8). Igualmente, la Procuraduría está habilitada para demandar a los particulares ante la jurisdicción ordinaria cuando sus actuaciones atenten contra los intereses de la República.

Pero además de estas funciones, corresponde a la Procuraduría el ejercicio de aquellas que le atribuyan las leyes y demás actos normativos y, en ese sentido, existen una serie de leyes que habilitan igualmente al Procurador para actuar en juicio.

Tal es el caso de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que prevé la participación en juicio de la Procuraduría tanto en los procedimientos de nulidad de actos administrativos de efectos generales (Art. 116) como en los de nulidad de actos administrativos de efectos particulares (Art. 125) cuando, respectivamente, se estime que su intervención es necesaria por estar en juego los intereses de la República o así lo exija la naturaleza del acto impugnado.

De igual forma la novísima Ley del Estatuto de la Función Pública (Art. 99) prevé la participación del Procurador General del Estado en el proceso contencioso administrativo funcional en su condición de representante y defensor de los intereses y derechos patrimoniales del Estado, estableciendo: que la carga de dar contestación a la querrela corresponderá “a la parte accionada”, por lo que debe interpretarse, siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia, que si el ente carece de personalidad jurídica propia y participa de la personalidad jurídica del Estado, su representación corresponderá al Procurador General del Estado. Por el contrario, si el ente goza de personalidad jurídica propia, su representación en juicio corresponderá a los representantes judiciales que hayan tenido a bien designar, salvo que la Procuraduría estime procedente su intervención por estar en juego los intereses del Estado.

Ahora bien, en cualquiera de los supuestos antes expuestos, la Procuraduría del Estado Zulia, en su condición de representante del Estado Zulia, está facultada para realizar cualquier actuación procesal que fuera necesaria para la mejor defensa de los derechos e intereses del Estado. En ese sentido, cabe distinguir cuando el Estado actúa como sujeto activo de la

relación procesal y cuando actúa como sujeto pasivo de la misma.

Cuando el Estado funge como parte accionante dentro de la relación procesal, la Procuraduría está facultada para ejercer por ante la jurisdicción ordinaria cualquier tipo de acción contra los particulares en defensa de los intereses del Estado y, en ese sentido puede, incluso, solicitar decreto de medidas cautelares en su favor y oponerse a las solicitadas en su contra, también puede la Procuraduría promover y evacuar cualquier tipo de pruebas, oponerse a la admisión de las pruebas promovidas por el particular y controlar su evacuación, presentar informes -si fuere el caso según la naturaleza de la acción ejercida- y hacer observaciones a los presentados por su contraparte y solicitar la ejecución forzosa de la sentencia que a favor del Estado se acuerde.

Cuando la República actúa como parte pasiva demandada, la Procuraduría del Estado Zulia está igualmente habilitada para realizar cualquier acto procesal que se requiera para la defensa de sus derechos e intereses patrimoniales, con la particularidad de que, en estos casos, como se señaló, el desarrollo de la relación jurídico procesal se verifica en el marco de la jurisdicción contencioso administrativa, en ambos casos, deberá acatar las instrucciones emanadas del Gobernador del Estado Zulia, *so pena* de incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa.

Pero si bien en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa la actuación de la Procuraduría pueden verificarse en tres escenarios, a saber, (i) los procedimientos de nulidad de

actos administrativos generales dictados por el Ejecutivo Regional, (ii) los procedimientos de nulidad de actos administrativos particulares dictados por el Ejecutivo Regional y (iii) las demandas dirigidas a determinar la responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios causados, es lo cierto que salvo las particularidades atinentes a las normas de procedimiento aplicables que, en los dos primeros casos, serán las especiales del proceso contencioso y en el tercero las normas de procedimiento del derecho común con ciertas atenuaciones previstas en la Ley Orgánica de la Corte, en todos estos procedimientos el procurador queda habilitado para realizar cualquier tipo de actuación procesal y en ese sentido, dependiendo de la naturaleza de la acción ejercida puede: oponer cualquier tipo de excepción o defensa en respaldo de la legalidad del acto impugnado, -si fuere el caso- dar contestación a la demanda y, en tal sentido, oponer las cuestiones previas a que hubiera lugar, promover y evacuar pruebas y oponerse a la admisión de las promovidas por el actor, apelar de los autos que admiten o niegan las pruebas promovidas por las partes, controlar la evacuación de las pruebas promovidas por el demandante, presentar informes y hacer observaciones a los presentados por su contraparte y apelar de las sentencias que les sean desfavorables.

En otros casos, cuando los derechos e intereses patrimoniales del Estado no están en juego, la intervención de la Procuraduría tiene un matiz consultivo que se concreta en la emisión de dictámenes u opiniones sobre la procedencia de la acción de nulidad intentada contra un acto de la Administración (Art. 97, número 3 de la Constitución del Estado Zulia).

Por lo antes expuesto, podemos concluir que el Procurador del Estado, tiene la representación y defensa judicial y extrajudicial del Estado Zulia, funciones que ejecutará previa instrucciones que le sean impartidas por el Gobernador del Estado.

Sin otro particular a que hacer referencia, se suscribe de usted.

Atentamente,

**Dr. NESTOR RINCÓN FUENMAYOR**  
**CONSULTOR JURÍDICO**

NRF/RS